

C.A. SANTIAGO

Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En proceso RUC N° 2200103999-0 / RIT N° 186-2024 del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia definitiva de fecha once de octubre del año dos mil veinticuatro, lo(a)s magistrado(a)s Gloria Canales Abarca, Pablo Contreras Guerrero y, Rossana Costa Barraza, en lo pertinente, resolvieron condenar a don Dyland David Ramírez Palmera, cédula de identidad para extranjeros N° 14.883.632-9, a sufrir la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, a las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, inhabilitación para obtener licencia para conducir vehículos motorizados, por el término de quinientos cuarenta y un días y al pago de una multa a beneficio fiscal de dos unidades tributarias mensuales, por su responsabilidad en calidad de autor del delito consumado de conducción de vehículo motorizado con placa patente correspondiente a otro vehículo, ilícito previsto y sancionado en el artículo 192 letra e) de la Ley N°18.290, ocurrido en la comuna de Providencia, el día 24 de enero del año 2022 abonándosele 1 día que permaneció privado de libertad con ocasión de esta causa.

En contra de esta decisión, la defensa de don Dyland David Ramírez Palmera, dedujo recurso de nulidad por el motivo previsto en el artículo 374 letra e) con relación a los artículos 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal, y; en subsidio, recurso de apelación en contra de la resolución dictada en audiencia de fecha 11 de octubre de 2024 en virtud de la que se dispuso no conceder pena substitutiva alguna a favor del condenado.

Solicitó en concreto, en lo principal, que se anule en su totalidad el juicio oral y la sentencia definitiva impugnada, o sólo ésta, determinando el estado de procedimiento en que debe quedar, a fin de que el tribunal no



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LCXSXRQGFY

inhabilitado que corresponda, disponga de la realización de un nuevo juicio oral, fijando día y hora para el efecto. En subsidio de la primera petición, en caso en que se rechace el arbitrio de nulidad interpuesto en autos y se mantenga la condena del recurrente, se acoja la apelación en contra de la resolución dictada en audiencia de fecha 11 de octubre de 2024 que dispuso no conceder pena sustitutiva alguna de la Ley N° 18.216, decretando en su lugar, cumplimiento efectivo de la pena.

CONSIDERANDO:

I. En cuanto al recurso de nulidad

PRIMERO: Que, antes que todo, es necesario recordar que el recurso de nulidad regulado en el Código Procesal Penal, ha sido instituido para velar por la correcta aplicación de la ley dentro de los hechos que se dan por establecidos en la sentencia. A través de él se protege la observancia, significado y alcance de la ley, lo que importa entonces revisar el juicio de derecho contenido en la sentencia, pero en los límites del motivo invocado, respetando los hechos establecidos en la sentencia, los que conforme al motivo de nulidad que se esgrime, resultan inamovibles para esta Corte.

SEGUNDO: Que, respecto de la petición principal formulada en autos, el recurrente esgrime la causal de nulidad prevista en el artículo 374 letra e) con relación a los artículos 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal, esto es, haber omitido la sentencia, la “exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”. En efecto, indica, por un lado, que dicho vicio se configuró a propósito de la valoración del elemento subjetivo de dolo directo comprendido en el tipo penal en cuestión y, por otro lado, a propósito de la valoración de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que se le imputa.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LCXSXRQGFY

TERCERO: Que en lo que concierne el primer vicio invocado por el actor, éste señala que la sentencia impugnada ha obrado con infracción al principio lógico de razón suficiente, en cuanto a la forma en que da por acreditado el elemento subjetivo del tipo penal por el que fue condenado.

Indica que no resultó controvertido que éste había adquirido la moto de manera informal, mediante la plataforma MarketPlace, pero que, sin embargo, para establecer el elemento subjetivo del tipo penal -esto es, que se actúe *a sabiendas* que el vehículo tiene placa falsa, alterada o que corresponda a otro vehículo-, el tribunal *a quo* indicó en su considerando noveno, que “las inconsistencias en la declaración del acusado, que el día de los hechos afirmó a los funcionarios policiales que la moto se la habían facilitado, para luego en la audiencia sostener que la había adquirido en la plataforma market place, con toda su documentación, sin embargo, no realizar ninguna diligencia para obtener su recuperación; llevan a la conclusión de que actuó “a sabiendas” encontrándose satisfecho este elemento del delito, máxime considerando que el encartado cuenta con un familiar directo, que tiene visa definitiva en Chile, por lo que no resulta razonable sostener el desconocimiento de la legislación en los términos alegados, especialmente si en el país de origen se estilan similares normas de registro de vehículos motorizados, tal como indicó en audiencia el testigo Palmera Timaure.”.

CUARTO: Que, sobre la base del escenario descrito en el motivo noveno, el análisis del fallo impugnado en la cuestión que interesa, permite sostener que éste expone clara, lógica y completamente los hechos y circunstancias que dio por probados, y realizó una pormenorizada valoración de los medios de prueba presentados en autos por las partes, de manera que el examen conduce lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador, de forma tal que resulta legítimo afirmar que satisface la exigencia legal contenida en el citado artículo 297 del Código Procesal Penal.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LCXSXRQGF

En efecto, el motivo transcrito parcialmente en el considerando tercero de este pronunciamiento, contiene un suficiente análisis de la prueba rendida y, en éste se aprecia las razones que se considera suficientes para estimar que se configuraba el delito establecido en el artículo 192 letra e) de la Ley N° 18.290, imputable al recurrente, sin que se adviertan en el razonamiento contradicciones ni saltos lógicos.

En tales condiciones, no se observa que en el proceso descrito, la sentencia que se revisa se haya apartado de modo manifiesto -como se vio, exige el motivo de nulidad en que se sustenta el recurso- de las exigencias establecidas por los artículos 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal, sino que, por el contrario, aparece haberlas satisfecho debidamente.

QUINTO: Que en lo que concierne el segundo vicio invocado por el recurrente respecto de la misma causal, éste señala que la sentencia impugnada habría errado en la valoración de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que se le imputa y, específicamente respecto de aquellas dispuestas por los numerales 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal en cuanto ésta no le habría reconocido al condenado, las circunstancias minorantes de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos y de irreprochable conducta anterior.

SEXTO: Que, respecto de la atenuante dispuesta por el numeral 6° de la disposición en comento, indica que, en el considerando duodécimo de la sentencia del Tribunal, no da por establecida la minorante de irreprochable conducta anterior, pues el condenado es “una persona de nacionalidad venezolana, con situación migratoria irregular en el país, razón por la cual su registro prontuario, con un RUT chileno, sólo se estableció en función de un proceso penal de reciente data que se sigue en su contra.”.

Sostiene que, si bien el certificado de antecedentes presentado por la defensa fue considerado insuficiente por el juez *a quo*, no es le es posible obtener uno diverso y correspondía de todas formas al Ministerio Público



presentar prueba en contrario, y a falta de aquella, por principio *pro reo*, se debiese haber entendido por configurada la atenuante.

SÉPTIMO: Que, sin embargo, el motivo noveno de la sentencia al que hace referencia el recurrente, indica en su párrafo segundo que “el sólo hecho de que el RUT provisorio que se le asignó al imputado para el proceso que ahora enfrenta no consigne anotación penal previa, en ningún caso es prueba suficiente de que éste haya tenido una conducta pretérita libre de reproches. A su vez, no es esa una cuestión que tenga que ser demostrada por el ente acusador, pues resulta de cargo de la defensa incorporar aquellos antecedentes que permitan morigerar la responsabilidad penal de sus representados, no siendo sustentada esta circunstancia por la presunción de inocencia. Y, a ese respecto, la defensa no ofreció ningún antecedente que permitiera asumir que, fuera del proceso penal que el acusado se encuentra actualmente imputado, aquél mantuviera en territorio nacional una conducta exenta de la comisión de infracciones penales.”.

Por consiguiente, a juicio de esta Corte, la sentencia impugnada contiene un suficiente análisis de la prueba vertida en autos, y realizó una valoración razonada de, en particular, el certificado de antecedentes presentado por la defensa, explicando por qué resulta insuficiente para acreditar una irreprochable conducta anterior. En tales condiciones, el vicio alegado no podrá prosperar respecto de la aminorante en comento en el presente considerando.

OCTAVO: Que, ahora bien, en lo que concierne la atenuante dispuesta por el numeral 9 del artículo 11 del Código Penal, el recurrente indica que, el Tribunal yerra en la manera en que se forma el convencimiento que sustenta el rechazo de la concurrencia de la atenuante correspondiente a la colaboración sustancial, toda vez que la declaración del actor sería la única prueba que permitió sustentar el veredicto condenatorio, lo que no fue considerado. Lo anterior sería una decisión antojadiza y arbitraria.



NOVENO: Que, al respecto, cabe recordar que la facultad de ponderar y calificar la colaboración prestada por el acusado como sustancial para el esclarecimiento de los hechos investigados, es una decisión privativa de los jueces del fondo, ya que ellos son los llamados a sopesar y evaluar con el mérito de los antecedentes y pruebas allegadas, si la actividad desarrollada por el acusado durante el transcurso del procedimiento, contribuyó o no a la labor jurisdiccional del esclarecimiento de los hechos investigados, labor que no puede ser desarrollada por esta Corte, pues implicaría, inevitablemente, una nueva valoración y apreciación de todos los elementos que condujeron a los jueces de la instancia a concluir lo que, precisamente, se discute por la recurrente, todo lo cual conllevaría a exceder el margen de aplicación del recurso de nulidad.

DÉCIMO: Que, de todas formas, la sentencia recurrida analiza en su considerando decimotercero, las declaraciones que prestó el condenado al Tribunal y, en base a ello, determinó no reconocer la morigerante dispuesta por el artículo 11 N° 9 ya citado, indicando que “si bien el acusado prestó declaración en el juicio oral, ello estuvo encaminado a acreditar su teoría del caso, con inconsistencias que debieron ser soslayadas con la prueba de cargo, señalando, a modo ejemplar, que indicó en su declaración judicial que la motocicleta la había comprado, mientras que a los funcionarios policiales dijo que se la habían facilitado; en relación a los documentos requeridos para la circulación vial, afirmó que contaba con ellos y que coincidían con la patente, sin embargo, nunca fueron aportados al proceso; incoherencias sustanciales que llevan a concluir que su declaración estuvo sólo dirigida a sustentar su teoría del caso, pero que no constituye una colaboración ni menos sustancial para el esclarecimiento de los hechos que amerite la consideración de la minorante alegada.”

Así las cosas, queda claro en la sentencia recurrida, que, para apreciar la procedencia de la aplicación de la atenuante antes indicada, ésta realizó



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LCXSXRQGFY

una exhaustiva ponderación de la prueba, y en particular de la misma declaración del condenado, concluyendo que ésta no tenía la aptitud de establecer una colaboración sustantiva en la investigación, sin que se pueda observar una infracción a los artículos 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal. En razón de lo antes expuesto, el presente reproche formulado por el recurrente en esta acción deberá ser desestimado.

II. En cuanto al recurso de apelación

DECIMOPRIMERO: Que, puesto que el recurso de nulidad interpuesto en autos no prosperó, corresponde ahora examinar la apelación presentada en subsidio de la petición principal, en contra de la resolución dictada en audiencia de fecha 11 de octubre de 2024 que dispuso no conceder pena sustitutiva alguna al recurrente.

La resolución en cuestión indica que “En cuanto a la forma de cumplimiento, habiéndose llevado a cabo la audiencia contemplada en el artículo 34 de la Ley N°18.216, considerando la imposibilidad material de llevar a cabo la pena sustitutiva de expulsión del territorio nacional, según expuso el representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y que el condenado es un extranjero que no reside legalmente en el país, el Tribunal se encuentra impedido para decretarla así como otra pena sustitutiva de aquellas contempladas en la ley N°18.216, por lo que la sanción deberá ser cumplida en forma efectiva.”.

Indica el recurrente que la referida resolución es cuestionable, en primer lugar, porque se descartó la medida sustitutiva de expulsión del territorio nacional, por consideraciones que no le son imputables, y; en segundo lugar, porque en virtud del artículo 4 letra c) de la Ley N° 18.216, procede la remisión condicional de la pena si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, permitieran presumir que no volverá a delinquir”.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LCXSXRQGFY

Sostiene que es precisamente su caso, atendido que ha acompañado a estos autos un certificado de antecedentes de enero del año en curso y un Informe Social que da cuenta de que éste vive en Chile con su tío materno, el que tiene residencia definitiva en nuestro país y acaba de adquirir un inmueble.

DECIMOSEGUNDO: Que, sin embargo, esta Corte comparte los argumentos del juez de primera instancia, en cuanto -como ya se dijo en el considerando séptimo del presente pronunciamiento- la circunstancia que el condenado tenga un RUT provisorio -que se le asignó para el proceso de los presentes autos- que no tiene anotaciones penales previas, no acredita fehacientemente de que éste goce de irreproachable conducta anterior ya que, siendo una persona extranjera con situación migratoria irregular, los datos relativos a su identidad o prontuario no son fiables.

Por otro lado, fuera del Informe Social que da cuenta de la situación personal del familiar con quien viviría, la defensa tampoco acreditó que el recurrente conste de otros tipos de arraigos en nuestro país, sea laboral o familiar.

Por consiguiente, el artículo 4 letra c) de la Ley N° 18.216 no recibe aplicación en el caso de autos, ya que esta Corte no tiene suficientes antecedentes que permitan presumir que el condenado no volverá a delinquir, de modo que no procede la remisión condicional de la pena.

Y en virtud, además, de lo dispuesto en los artículos 364 y siguientes, 372, 376 y 384 del Código Procesal Penal, se declara que:

I. Se rechaza, sin costas, el recurso de nulidad deducido por el condenado don Dyland David Ramírez Palmera, en contra de la sentencia definitiva de fecha once de octubre del año dos mil veinticuatro, en autos RUC N° 2200103999-0 / RIT N° 186-2024 del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, la que en consecuencia **no es nula**.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LCXSXRQGFY

II. Se confirma la resolución dictada en audiencia de fecha 11 de octubre de 2024, que dispuso no conceder pena sustitutiva al recurrente, rechazando así la apelación de la defensa que solicitaba la remisión condicional de la pena en virtud del artículo 4 letra c) de la Ley N° 18.216.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción de la Abogada Integrante Sara Moreno F.

Penal N° 6203-2024.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LCXSXRQGFY

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Hernan Alejandro Crisosto G., Fiscal Judicial Macarena Troncoso L. y Abogada Integrante Sara Genevieve Moreno F. Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LCXSXRQGFY